

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CENTROAMERICANA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA JUVENTUD Y LA TRINACIONAL DE ACJs

El Salvador, Honduras y Nicaragua

Centroamérica: la Joven

Centroamérica es istmo de 499.281 kilómetros cuadrados, en la que viven unas 35 millones de personas. La mayor parte de la población es joven, de hecho el sector con edades que oscilan entre 15 y 24 años representa alrededor de 22% de todos los habitantes (20.6%, Honduras; y 21.7% El Salvador y Nicaragua). En el caso de Honduras, 65% de los 6.2 millones de habitantes son menores de 25 años.

En la región centroamericana persisten promedios significativos de crecimiento poblacional (2-3% anual), fenómeno expresado especialmente en los casos de Honduras y Nicaragua. Para los expertos, la región se encuentra en una etapa de transición demográfica (índices altos, moderados o bajos de natalidad y de mortalidad), con un incremento en la esperanza de vida.

De la guerra a las políticas de ajuste

La violencia armada que afectó a Centroamérica en los años 80 dejó profundas huellas en la región. La suscripción de Acuerdos de Paz en 1990-1992 concluyó las guerras, pero no cortó las modalidades vinculantes de la violencia, asociadas a profundas desigualdades e inequidades sociales y económicas. Las raíces del conflicto persistieron aunque el conflicto haya desaparecido.

Pese a que los acuerdos alcanzados en los países donde las confrontaciones fueron más graves (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) incluyeron compromisos a favor de una democratización en las relaciones sociales y de producción, los mismos no se concretaron o sólo lo hicieron parcialmente y tampoco visualizaron el caso de los jóvenes

En los años 90 la irrupción de las políticas de ajuste estructural (neoliberal) condicionó o postergó la atención pública sobre el cumplimiento de los acuerdos económicos y sociales relativos al conflicto de los años 80 e introdujo nuevos elementos de tensión.

En esa etapa de transición, 1989-1990, fue cuando se inició el Programa de Integración Trinacional, con las ACJ de El Salvador, Honduras y Nicaragua. No era un período histórico fácil para la región y las condiciones imperantes marcaron el primer plan de trabajo conjunto denominado “Programa de Acompañamiento al Proceso de Paz en Centroamérica” (PACPA), vigente entre 1990-96, con el respaldo financiero de la ASDI (Suecia).

Uno de los objetivos del PACPA fue apoyar la participación de las ACJs en la construcción de movimientos ciudadanos. En los países de la región existen diferentes organizaciones no gubernamentales, privadas e intergubernamentales que desarrollan políticas de juventud. En general, estas organizaciones surgidas de la sociedad civil, cubren una amplia gama de actividades dirigidas hacia la juventud: desde políticas de protección al medio ambiente y de sexualidad adolescente, hasta capacitación de mano de obra y participación política.

El PACPA incluyó una serie de proyectos de desarrollo juvenil y comunitario entre las poblaciones más pobres y vulnerables que permitían el establecimiento de alianzas estratégicas. La orientación del programa fue correcta y sigue teniendo validez ya que tras doce años consecutivos de políticas de ajuste, el objetivo de la estabilización y posterior crecimiento de la economía sigue pendiente. En lo social es evidente un retroceso profundo en el nivel de vida de la población, y las economías o no crecen o crecen por debajo de los promedios de natalidad de la población; por ejemplo, Honduras, que en el 2002 tuvo una tasa de crecimiento económica oficial de 2%, mientras que su población aumenta a 2.5% anual.

Centroamérica siguió en la década anterior los lineamientos del llamado “Consenso de Washington”, con un modelo de “desarrollo” basado en la liberalización de la economía, promoción de exportaciones acompañada de privatización, liberalización del comercio, constitución de zonas de libre comercio maquileras (zonas francas o libres) y una disminución sensible de la participación del Estado en el mercado.

Ahora, en el nuevo milenio las líneas básicas de esa política persisten, pero en el contexto de una regionalización creciente, atada a las políticas de los organismos multilaterales y las negociaciones de bloques de libre comercio.

Ese modelo económico, social y político ha beneficiado a un sector privilegiado de la sociedad, pero a costa de un proceso de empobrecimiento generalizado que tiene a la juventud entre sus víctimas principales. Bajo la excusa de reducir la permanente brecha fiscal se han reducido los gastos sociales, con un fuerte impacto en programas de educación, capacitación, salud, empleo y vivienda. Los privilegios, mientras tanto, se acumulan en un pequeño sector asociado al capital extranjero o a las exportaciones.

El ajuste estructural pretende, fundamentalmente, vincular las economías de los países subdesarrollados y obviamente, de Centroamérica, al mercado internacional, a partir del criterio de las "ventajas comparativas" (con la excepción de Costa Rica, que trata de estimular sus "ventajas competitivas") y entre estas, en los casos de Honduras y Nicaragua, está ofrecer una mano de obra joven, abundante y barata, carente de mecanismos de protección laboral. La maquila hondureña, por ejemplo, emplea a unos 120 mil jóvenes – sobre todo mujeres – que venden su fuerza de trabajo no calificada entre los 18 y 25 años de edad. Después de ese tope se convierten en "veteranas" que el modelo industrial de explotación intensiva va desechando.

Los jóvenes migrantes

La inequidad económica y social existente es uno de los factores que explican la condición migrante de los jóvenes centroamericanos. Honduras, Nicaragua y El Salvador califican como países expulsores de población. La migración actual difiere de la existente en los años 80, cuando la represión y la violencia política e ideológica en la región motivó éxodos para preservar el derecho a la vida. La migración actual, en términos generales, también es forzada, pero se asume como una decisión personal y familiar para encontrar trabajos mejor remunerados.

Tres son los rumbos migratorios actuales de la juventud: a) A EEUU b) Intra-centroamericano y c) al interior de cada país. El trasfondo de esa migración está relacionado con la concentración de la tierra, desigualdades sustanciales en la distribución del ingreso y la riqueza y en el acceso a los servicios básicos entre las distintas clases sociales, capacidad limitada del sector agrícola para absorber la mano de obra, altos índices de subempleo y desempleo en el sector rural como en el urbano, presión del crecimiento demográfico sobre los mercados de trabajo, mayores expectativas sociales de ciertos grupos, creación de polos industriales maquiladores, y la concentración de servicios en las ciudades.

Muchas veces la preocupación gira sobre los puntos de destino de esos jóvenes y la capacidad que exista en ellos para atender sus necesidades, pero también queda pendiente la otra parte del problema: ¿y qué pasa en las regiones expulsoras? La tendencia a sobrepoblar los corredores centrales (caso de Honduras) o zonas (El Pacífico, en Nicaragua) crea mayores desigualdades al interior de los países. Sólo la región del Pacífico en Nicaragua concentra más de la mitad de equipamiento de servicios y 85% de la infraestructura del país.

Quienes emigran, contrario a tendencias del pasado, no sólo son los hombres sino también las mujeres. Existe un proceso de concentración de las mujeres en las ciudades que se compagina con la creciente feminización de la pobreza.

Promesas y realidades

La realidad social y económica que afecta a la mayoría de la población contrasta con los acuerdos formales alcanzados en las citas de presidentes de Centroamérica o presente en los organismos de integración regional o en los convenios internacionales suscritos por los diferentes gobiernos.

En los distintos compromisos suscritos a partir de la Declaración de Tegucigalpa (1992) o El Salvador (1995) los gobernantes deciden impulsar acciones para el combate de la pobreza y la generación de empleos, la promoción de la integración social y la cohesión social, y el respeto de los derechos humanos, enfatizando en la equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los derechos de la infancia, la juventud, las personas de la tercera edad y las personas discapacitadas.

Los compromisos, sin embargo, no han logrado trascender de lo formal, como se constata en áreas claves como la de Educación. En el diseño de las políticas educativas y de su justificación, existe clara conciencia de la importancia que tiene dirigirlas a niñez y juventud, pero en la práctica no se da. Existe una amplia población juvenil en riesgo de ser eliminada del sistema educativo por dificultades de aprendizaje, ausentismo y bajo rendimiento. Grupos con particular situación de exclusión son aquellos constituidos por etnias y en las zonas rurales. La escolaridad rural no cuenta con establecimientos educacionales secundarios en número apropiado y accesible y así se facilita la deserción o finalización prematura de los estudios y la migración sin mayor preparación para los cambios culturales y las exigencias laborales que la acompañan. Esas debilidades empañan resultados positivos en la tasa de matrícula a nivel de educación primaria, que se acerca al 100% de la población en edad escolar, confirmando un sistema con una base piramidal; ancha en la entrada y angosta en la salida. En Honduras el grado de escolaridad es de apenas 5 años y en Nicaragua de 6.2, y en ambos países los promedios son mucho más bajos en las zonas rurales.

En Centroamérica la atención a las demandas sociales y económicas de la juventud está dispersa en los esfuerzos de muchas unidades del sector público, que llegan a cubrir o beneficiar en varios casos a pequeños grupos de la población juvenil sin tener influencia sobre la mayoría. Se dan en consecuencia, múltiples esfuerzos guiados por diversas instituciones, que en algunos casos caen en el fenómeno de la duplicidad.

Pese a los llamamientos y reclamos constantes, la juventud no ocupa aún un lugar preponderante en las políticas de desarrollo de la región. Si bien la juventud está presente en los diferentes planes y programas nacionales, existen fuertes carencias en lo que se refiere a políticas integrales para ese sector y que beneficien en particular a los grupos en desventaja, como son aquellos pertenecientes al campesinado, etnias y las mujeres jóvenes.

Las políticas gubernamentales en educación, salud, empleo, recreación y participación ciudadana presentan importantes vacíos que se expresan en escasas oportunidades para una apropiada inserción social y productiva de los jóvenes.

Fenómenos como la deserción y la repitencia en el sistema educativo, asociados a las condiciones de pobreza de la juventud centroamericana, son pruebas inobjtables de que la deuda social aumenta en lugar de reducir.

Estimaciones de CEPAL muestran que dos de cada tres centroamericanos viven en condiciones de pobreza, y prácticamente uno de cada cinco en condiciones de extrema pobreza. La pobreza en la región tiende a concentrarse en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, no sólo por estar más poblados, sino también por registrar la mayor incidencia de desigualdades, carencias sociales crónicas y corrupción.

Enfrentada a una temprana presión por la supervivencia, gran parte de la juventud centroamericana entra al mercado laboral en condiciones de desventaja y se vuelve la mano de obra principal del sector informal de la economía, donde la inestabilidad laboral es el patrón que caracteriza su quehacer cotidiano. El ingreso precoz al mundo laboral implica, por lo general, el abandono de los procesos de formalización educativa.

Precisamente, una de las características asumidas por la crisis económica de los países centroamericanos, es la reducción o "precarización" de las condiciones del empleo.

En ese contexto no resulta extraño que la morbilidad entre la juventud tiene que ver con la violencia común, el SIDA, drogas y otras. La mayor parte de la demanda pública de consulta médica de adolescentes y jóvenes se relaciona con los aspectos de salud mental, accidentes, experiencias de la vida reproductiva y enfermedades de transmisión sexual.

En Centroamérica, las características asumidas por la fecundidad adolescente son preocupantes y, pese a campañas sostenidas de educación, no han variado sustancialmente en los últimos veinte años. Se estima que en Honduras el 15% de las madres a nivel nacional son adolescentes. De hecho, los embarazos tempranos son para las jóvenes su iniciación al cada vez más extendido fenómeno de las "madres solteras". En Honduras, más del 40% de los hogares ya tienen como cabeza de familia a una mujer.

La juventud centroamericana comienza su vida sexual en forma temprana. Se estima que en Nicaragua 50% de las mujeres que tienen su primera relación sexual, lo hacen antes de los 18 años y probablemente gran parte del otro 50% antes de los 20 años de edad. Este es un fenómeno paralelo a la extendida práctica del aborto, especialmente entre las mujeres jóvenes. Un aspecto complejo, por las diversas ramificaciones que adquiere, es la problemática del abuso sexual, el incesto y la violencia doméstica.

En lo referente al SIDA la información existente proporciona datos dramáticos. En una región donde son usuales los subregistros, Honduras es el que afronta la pandemia más grave. Desde que el primer caso se detectó en 1985, las estadísticas no cesan de crecer. Entre las edades que suelen ser las más propensas al contagio del SIDA está la edad productiva, debido a que alrededor del 60% de los infectados tienen menos de 25 años. Si se considera que la productividad promedio de un hondureño es de 25 años, ésta se verá reducida en aproximadamente 15 años y provocará un impacto económico de significativas proporciones para el país.

Ejecuciones de jóvenes

Sí el SIDA provoca la muerte de la mayoría de sus portadores en menos de cinco años, en Centroamérica hay otras formas más rápidas de atentar contra los jóvenes, entre ellas las llamadas “ejecuciones extrajudiciales”. Dos países, Guatemala y Honduras, son el escenario de los mayores exterminios. Desde 1998 hasta marzo del 2003, en Honduras las organizaciones no gubernamentales, como Casa Alianza, registran la muerte bajo condiciones no esclarecidas de unos 1500 jóvenes, en su mayoría con edades que van de 17 a 22 años. El gobierno hondureño rechaza que haya una “política de Estado” detrás de las muertes, pero reconoce oficialmente el asesinato no esclarecido de 744 jóvenes cuyas edades se ubican por debajo de los 18 años. La sangría ha ido en incremento, al grado que conforme las estadísticas del Programa de Apoyo Legal de Casa Alianza, sólo en febrero del 2003 fueron asesinados 67 jóvenes, más que el promedio acumulado en todo 1998 (55 casos). Ante las múltiples exigencias nacionales e internacionales, el Gobierno creó en mayo de 2002 la Comisión Permanente de Protección a la Integridad Física y Moral de la Niñez y dentro de la Policía organizó la Unidad Especial de Investigación de Muertes Violentas de Niños y Niñas. Hasta la fecha, los avances en la investigación son nulos. El argumento oficial es que la mayoría de las víctimas son el resultado de enfrentamientos y venganzas entre pandillas (maras) rivales, que es uno de los fenómenos sociales más preocupantes y extendidos en la Centroamérica actual. Sin embargo, al menos en el caso de Honduras, sólo uno de cada cuatro asesinatos se atribuye directamente a pandillas. La

ACJ de Honduras mantiene una permanente actividad de incidencia y monitoreo de esta situación, considerado el capítulo de la violencia más grave desde los años 80. Dos “maras” ligadas a El Salvador dominan el escenario regional: la “18” y la “Salvatrucha”, cuyo crecimiento espectacular se explica en gran medida porque ya existían en Honduras y otros países miles de jóvenes propuestos a integrarlas o vincularse a las mismas. En el caso hondureño cuatro circunstancias son visibles en la expansión de las pandillas: a) el avance de la exclusión, con la adolescencia sobreviviendo en un contexto progresivo de crisis económica, social y cultural; b) la represión “preventiva” que victimizó y abuso de la llamada “niñez de y en la calle”, c) la consolidación de la identidad de las maras, creando su propio conflicto; y d) la injerencia de grupos externos del crimen organizado que alientan el tráfico de armas, drogas y la delincuencia común.

Centroamérica es considerado un puente para el narcotráfico entre Sudamérica y Norteamérica y el volumen ha sido tan grande en los últimos años que también ha ido conformando un mercado interno de consumo. La cocaína y el crack se suman a las drogas tradicionales, como la marihuana. Los adictos en la región son cada vez más jóvenes.

Frente a quienes reclaman “mano dura”, cárcel, reducción de la edad punible o muerte para los “menores infractores”, las ACJ demandan programas que contribuyan a su desarrollo físico e intelectual, que estimulen su creatividad e interacción social en el campo del trabajo, la recreación y el deporte. Alcanzar ese objetivo demanda mucho esfuerzo porque el sensacionalismo con el que los medios de información tratan el tema atribuye a los jóvenes ser los responsables principales de la violencia delictiva que sacude a la región, criminalizando a la juventud y estigmatizándola ante la opinión pública.

Las políticas de juventud

Anteponiéndose a las formas institucionales de violencia, represión o marginación, las ACJ exigen políticas sustentadas en un paradigma positivo de la juventud, reconociendo que los jóvenes son un factor estratégico del desarrollo social y que la inversión en su capital humano resulta imprescindible y urgente para mejorar la calidad de vida y la productividad de la sociedad centroamericana.

Bajo esa perspectiva, las ACJ consideran insuficiente la creación de instituciones especializadas que se focalicen en la juventud como un segmento aislado, y proponen, en cambio, que sea un eje transversal en todas las políticas y programas de la administración pública.

Los y las jóvenes son actores sociales, con derechos y capacidades para intervenir en su presente y lograr una participación protagónica en su propio

desarrollo y en el desarrollo colectivo. Las acciones deben tender a que los jóvenes involucrados tengan un rol relevante y activo y no ser meros beneficiarios pasivos de estas. Por ello es necesario que las acciones incluyan a la juventud en las políticas de desarrollo – como las actuales Estrategias de Reducción a la Pobreza- para promover su capacidad de integración y aporte, para superar la marginación histórica de ese segmento, para resolver los crecientes grados de exclusión que vive en las últimas décadas y que se manifiestan críticamente en expresiones de disolución social y en situaciones críticas para la inserción en la educación y el trabajo.

Compartimos que las políticas de juventud deben ser el resultado de un proceso de negociación y concertación entre el Estado, la sociedad civil y las organizaciones juveniles existentes para atender de manera global las principales necesidades del sector en el marco de las metas y capacidades de desarrollo de la sociedad.

El esfuerzo de trabajo de la Trinacional promueve una visión regional de juventud, con énfasis en fortalecer la capacidad de incidencia y cabildeo, desarrollo juvenil y comunitario, género, recreación juvenil y medio ambiente. Se trata de facilitar, no obstaculizar, una efectiva incorporación de la juventud al desarrollo.

Una integración regional a marchas forzadas

Los esfuerzos de la Trinacional han sido un valioso aprendizaje de integración social horizontal que contrasta con una creciente y acelerada integración social, económica y fiscal de Centroamérica, promovida verticalmente en el marco de tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio.

Preocupa que las actuales negociaciones para la suscripción del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con EEUU, base de lo que podrá llegar a ser el acuerdo de inserción de la región en el ALCA, no sólo no tome en cuenta los intereses de la juventud sino que le reitere su papel de mano de obra barata.

Centroamérica se aboca, a corto plazo, a cambios sustanciales con la regionalización que se impulsa a partir de los tratados comerciales. En el escenario se prevé una gran movilidad de capitales financieros que buscan ventajas en uno u otro país, una mayor desintegración de los tejidos sociales y productivos en el agro y una movilidad forzada de mano de obra.

En ese marco es fundamental para las ACJ convertirse en un foro de discusión de la situación y políticas comerciales que atañen a la juventud de los países centroamericanos, identificar aquellas que la perjudican y apoyar o promover aquellas que efectivamente tomen en cuenta sus intereses para favorecerla.

Hasta ahora los mayores avances en beneficio de la niñez y juventud han sido jurídicos y se han dado al interior de los países, pero con una visión regional fragmentada. Existen Códigos de Familia, Procuradurías o Fiscalías de la Niñez y Adolescencia, Juzgados de Menores y otras instancias, pero aún no se consolida un cambio efectivo en el enfoque del Estado con respecto a la niñez y juventud.

Existen importantes temas que son marginados en términos de atención política, como un efectivo combate a la pobreza y sus mecanismos de reproducción en la juventud, la violencia y la represión social, la relación campo ciudad en el desarrollo de la juventud, el impacto actual de las condiciones en que se efectúa la educación primaria, secundaria y superior en el recorrido existencial de los y las jóvenes y en su aporte al desarrollo nacional, la relación educación, proyecto juvenil y empleo, los mecanismos de integración social de las juventudes pertenecientes a las etnias, a las zonas rurales y urbano marginales, la participación de la mujer joven en lo político, lo laboral y lo familiar o las modalidades de comunicación e información sobre la realidad juvenil para los propios jóvenes, entre otros.

Desafíos de las ACJ

- 1.- Fortalecer la coordinación trinacional de las ACJ de Honduras, El Salvador y Nicaragua y su vinculación con la cooperación internacional, creando redes de acceso a información, solidaridad e incidencia en políticas públicas relativas a la juventud.
- 2.- Incidir en las políticas y estructuras de los institutos, consejos o comisiones que hoy tienen a su cargo la definición y ejecución de las políticas de juventud, así como repensar en la lógica de relación que mantienen con la sociedad, ONG's y Estado.
- 3.- Generar o fortalecer espacios de expresión e intercambio a nivel regional, tales como foros y encuentros, favoreciendo el liderazgo que las ACJ tengan en campos determinados.
- 4.- Reconocer desde la institucionalidad de juventud, aquellas distintas formas lícitas de organización por las que optan los jóvenes, y sobre todo no estigmatizarlas; contribuir al reconocimiento de los jóvenes como ser-sujeto y de éstos con la sociedad y Estado, a través de la socialización de experiencias de investigación que describan y expliquen las nuevas formas de liderazgo, de objetivos y acciones.

- 5.- Crear las condiciones y los mecanismos más convenientes para garantizar la expresión de los puntos de vista de los jóvenes sobre el rumbo de Centroamérica.**
- 6.- Que los jóvenes reconozcan los espacios de decisión y opinión local y municipal, como un instrumento viable de participación reivindicativa.**
- 7.- Incidir en los procesos de autogestión de los jóvenes para resolver sus propios requerimientos, incrementar sus potencialidades y capacidades negociadoras como fuerza legítima de opinión y decisión.**
- 8.- Es indispensable se realicen diagnósticos amplios sobre las aspiraciones y motivaciones de la juventud, recuperando las especificidades propias de los distintos sectores que integran las juventudes, con objeto de adecuar las políticas de juventud a la realidad.**
- 9.- Potenciar alianzas estratégicas con otros sectores de la ciudadanía en el diseño y ejecución de los programas de juventud.**
- 10. Demandar un cambio en la imagen que de las juventudes proyectan los medios de difusión masiva, particularmente de la mujer, en un ambiente democrático, de equidad y respeto a la dignidad.**

TEGUCIGALPA, MARZO 2003